

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
Medellín, seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021)**

Apelación auto
Exp. 015-2019-00598

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, vencido el término de traslado establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, procede a dictar la decisión correspondiente frente al recurso de apelación interpuesto por JHON JAIRO ORTEGA MARULANDA, en el proceso que adelanta en contra de SUPERMADERAS SANCHEZ S.A.S. (Rad. 05001-31-05-015-2019-00598-01).

ANTECEDENTES:

El demandante inició este rito del trabajo y de la seguridad social, con el fin de obtener su reintegro al cargo de ocupaba antes del despido ocurrido el 6 de octubre de 2018 con el pago de la indemnización de que trata la Ley 361 de 1997 -(o en subsidio la indemnización por despido sin justa causa)-, cuando la pasiva lo desvinculó, sin pedir la autorización respectiva al Ministerio del Trabajo, porque en su sentir, es beneficiario de la denominada estabilidad ocupacional reforzada, ante su condición de salud específica, ocasionada por varios accidentes de trabajo y enfermedades de origen común. A ese efecto, entre otras cosas, sostuvo que no cuenta con los medios para que en forma particular le sea calificada su pérdida de capacidad laboral, por ello solicita se decrete como prueba una experticia en la que se dictamine el porcentaje de PCL a la fecha del despido, esto, a pesar de haber solicitado lo propio ante Colpensiones, de lo que no ha obtenido respuesta alguna.

El juzgado de primer nivel, en la audiencia del 13 de julio de 2020, negó el decreto de la prueba pericial, aplicando para el efecto el artículo 227 del C.G.P, según el cual, la parte que pretenda hacerse valer de un dictamen debe aportarlo, y como así no lo hizo, no podía ordenar la práctica de uno.

Contra esa determinación el demandante interpuso la alzada, señalando que la calificación técnica es una prueba necesaria y útil para demostrar el estado en que se encontraba su salud, a la data en que fue despedido (archivo digital 06 Minuto 21:40).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero destacar que la Sala es competente para resolver el asunto, dado que el auto recurrido se encuentra en el numeral 4 del artículo 65 del CPTSS, es decir, sí era posible su cuestionamiento a través del recurso vertical. En consecuencia, y de cara a los antecedentes planteados, el problema jurídico consiste en determinar si es viable o no el decreto de la prueba pericial solicitada en el escrito inicial.

Pues bien, el artículo 168 del CGP aplicable por remisión analógica permitida por el 145 del CPTSS, prescribe que el juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. Última característica definida por el tratadista Hernán Fabio López Blanco, a partir de la utilidad de la prueba indicando que: *“... se entiende por utilidad de la prueba el aporte que puede llevar al proceso para cumplir el fin de crear la certeza*

acerca de los hechos en el ánimo del funcionario judicial, en otros términos, el poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva”¹. Por manera que, si con las pruebas que reposan en el plenario, en sentir del juzgador, resulta suficiente para lograr el convencimiento necesario con el fin de tomar una decisión de fondo, considerando que otros elementos de convicción no aportarían al esclarecimiento de los hechos objeto de debate, estos últimos pueden ser rechazados.

En el sub lite, el demandante pretende su reintegro por ser beneficiario de la estabilidad reforzada en el empleo, afirmando que para la fecha de su despido presentaba una condición de salud que le impedía la ejecución de sus funciones, y por ello la pasiva no podía despedirlo sin el permiso previo de la autoridad administrativa, aportando para el efecto, copia de su historia clínica.

En esa línea, es útil, pertinente y conducente el decreto de la prueba pericial solicitada, dado que se trata de la calificación de PCL, concepto técnico que esclarecerá con mayores herramientas las condiciones en las que se encontraba el actor al momento del despido (Así lo ha reconocido la jurisprudencia nacional recientemente ver la sentencia SL572 de 2021). No debía, como hizo la *a quo*, negarse su decreto utilizando el artículo 227 del C.G.P, pues esa disposición parte del hecho que el dictamen del que pretende beneficiarse o valerse la parte, existe, y en este caso desde la demanda, el ciudadano ha planteado que hasta el momento su PCL no ha sido calificada.

Ante estas breves consideraciones, debe revocarse el aparte del auto gravado, que negó la práctica de la prueba pericial, y en su lugar se decretará la misma a cargo del polo activo, tal y como fue solicitada: para que se determine la PCL del actor al 6 de octubre de 2018, designándose para el efecto a la FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, entidad a la que se remitirá, a través del juzgado de origen las piezas relevantes del expediente, y que dentro de los 30 días siguientes al recibido de tal y del pago de los

¹ Código General del Proceso, Pruebas, Tomo 3, página 112, edición 2017.

correspondientes honorarios, emitirá el concepto técnico. El demandante deberá igualmente, atender los requerimientos que para el efecto realice el perito.

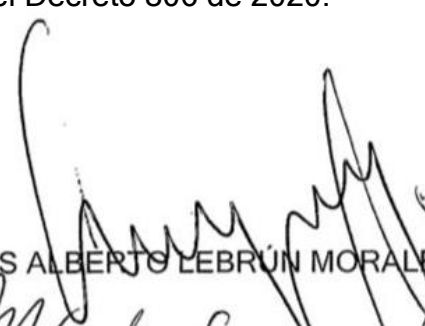
DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, la Sala Cuarta de Decisión Laboral, **REVOCA** el auto que negó el decreto de la prueba pericial. En su lugar, la **DECRETA**, designando para su práctica a la FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en los términos y condiciones planteados en la parte motiva de esta decisión.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 117 fijados el 7 de julio de 2021
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.